



Consejo de Seguridad

Distr. general
19 de mayo de 2003
Español
Original: inglés

Carta de fecha 5 de mayo de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

Tengo el honor de dirigirme a usted con referencia a mi carta de 7 de noviembre de 2002 (S/2002/1227).

El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto de Antigua y Barbuda, presentado en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Inocencio F. **Arias**
Presidente

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 1º de mayo de 2003 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad contra el Terrorismo y tiene el honor de responder a la nota del Comité de 4 de febrero de 2003.

La Misión Permanente tiene el honor de presentar al Comité contra el Terrorismo el informe complementario de Antigua y Barbuda (véase el apéndice).

Apéndice

Informe complementario de Antigua y Barbuda sobre las medidas para prevenir el terrorismo y la financiación del terrorismo

Respuesta a las observaciones y preguntas del Comité contra el Terrorismo

Apartado a) del párrafo 1:

En febrero de 2003, Antigua y Barbuda, en estrecha colaboración con la Secretaría del Commonwealth, acogió la Conferencia de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre legislación en materia de terrorismo. Como resultado de la Conferencia, Antigua y Barbuda está preparando una nueva ley general sobre la prevención del terrorismo. La Ley, basada en el modelo de ley del Commonwealth sobre terrorismo, revocará la Ley de prevención del terrorismo de 2001. En la nueva Ley figurarán disposiciones sobre las actividades de los órganos de supervisión encargados de fiscalizar las transacciones sospechosas de vinculación con el terrorismo y sobre el intercambio con las autoridades de otros países de la información obtenida. Las disposiciones propuestas acerca del intercambio de información con las autoridades de otros países son las siguientes:

Intercambio de información relativa a grupos terroristas y actos de terrorismo

1. La Autoridad de Supervisión, a petición de la autoridad competente de otro Estado, podrá comunicar a dicha autoridad cualquier información que obre en su poder o en el poder de cualquier otro departamento u organismo gubernamental en relación con lo siguiente:

- a) Las actividades o movimientos de grupos terroristas o personas sospechosas de estar implicadas en la perpetración de actos de terrorismo;
- b) La utilización de documentos de viaje alterados ilegalmente o falsificados por personas sospechosas de estar implicadas en la perpetración de actos de terrorismo;
- c) El tráfico de explosivos u otros artefactos letales o materiales peligrosos por grupos terroristas o personas sospechosas de estar implicadas en la perpetración de actos de terrorismo;
- d) La utilización de tecnología de las comunicaciones por grupos terroristas,

siempre que la notificación de esa información no esté prohibida por ninguna disposición jurídica ni, a juicio de la Autoridad de Supervisión, pueda afectar la seguridad nacional o la seguridad pública.

Apartado b) del párrafo 1:

En la Ley de prevención del terrorismo de 2001 no se tipifica la recaudación o provisión intencionales de fondos u otros bienes con la intención de que dichos fondos se utilicen para financiar el terrorismo. La Ley fue aprobada cuando apenas habían transcurrido tres meses desde el 11 de septiembre de 2001. En ese momento la atención se centraba en las medidas preventivas contra la financiación del

terrorismo. Sin embargo, se hizo patente entonces que en el futuro habría necesidad de ampliar y precisar las disposiciones de la Ley. Actualmente están en curso los trabajos para redactar y aplicar las disposiciones necesarias para cumplir las recomendaciones del apartado b) del párrafo 1 utilizando el modelo de ley del Commonwealth sobre terrorismo. La ley contendrá las disposiciones siguientes:

Provisión o recaudación de bienes para cometer actos de terrorismo

1. Toda persona que:

- a) Proporcione;
- b) Recaude; o
- c) Haga accesibles,

por cualesquiera medios, directa o indirectamente, bienes de cualquier tipo, con la intención de que dichos bienes se utilicen, o sabiendo o teniendo motivos fundados para creer que los bienes se utilizarán, en su totalidad o en parte, para perpetrar un acto de terrorismo incurre en delito y, de ser hallada culpable, le será aplicable una pena de hasta 10 años de prisión.

En la Ley de prevención del terrorismo de 2001 no hay disposiciones expresas por las que se prohíba a las personas ni a las entidades que no sean bancos e instituciones financieras que realicen transacciones comerciales con personas o entidades terroristas. Actualmente, la cuestión puede resolverse tratando esos casos como casos de posesión o control de fondos u otros activos en que tienen interés un terrorista o una organización terrorista, partiendo de la premisa de que, para realizar transacciones comerciales que tengan que ver con bienes vinculados con el terrorismo, la persona debe tener posesión o control en algún momento de bienes vinculados con el terrorismo, y aplicando a ello las disposiciones del artículo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2001. El problema se abordará en el nuevo proyecto de ley sobre terrorismo, basado en el modelo de ley del Commonwealth sobre terrorismo. Se prevé que el proyecto de ley incluirá las disposiciones siguientes:

Prestación de servicios para la comisión de actos de terrorismo

1. Toda persona que, directa o indirectamente, preste servicios financieros u otros servicios afines o los haga accesibles,

a) Con la intención de que se utilicen, en su totalidad o en parte, para cometer un acto de terrorismo o facilitar su comisión, o para beneficiar a una persona que vaya a cometer un acto de terrorismo o facilitar su comisión; o

b) A sabiendas de que, en su totalidad o en parte, serán utilizados por un grupo terrorista o beneficiarán a un grupo terrorista,

incurre en delito y, de ser hallada culpable, le será aplicable una pena de hasta 10 años de prisión.

Apartado c) del párrafo 1:

Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996

Las disposiciones concretas relativas a la congelación de fondos figuran en el artículo 19 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996, modificada

por la Ley de prevención del blanqueo de capitales (modificación) de 2001 y la Ley de prevención del blanqueo de capitales (modificación) de 2002.

El artículo 19 estipula lo siguiente:

19 1) En caso de que una persona (en la presente parte denominada “el acusado”):

- a) Haya sido hallada culpable de un delito de blanqueo de capitales; o
- b) Haya sido acusada de un delito de blanqueo de capitales, o vaya a ser acusada de él; o
- c) Sea sospechosa de haber participado en actividades de blanqueo de capitales,

la Autoridad de Supervisión puede solicitar al Tribunal Supremo que dicte una orden para que se congelen los bienes sobre los que existan sospechas fundadas de que el acusado tiene un interés.

1A) Las solicitudes en virtud del presente artículo deberán hacerse a pedido de parte.

1B) La Autoridad de Supervisión, siguiendo el procedimiento prescrito en el artículo 28 D, deberá notificar la orden prevista en el párrafo 1A) con un mínimo de catorce días de antelación al propietario de los bienes, al sujeto de la orden y a cualquier otra persona que la Autoridad de Supervisión tenga motivos para creer que puede tener un interés en los bienes.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3, la solicitud a la que se refiere el párrafo 1 podrá formularse contra uno o más de los bienes siguientes:

- a) Bienes especificados del acusado;
- b) Todos los bienes del acusado o a su nombre (incluidos los bienes adquiridos después de que se haya dictado la orden);
- c) Todos los bienes del acusado o a nombre del acusado (incluidos los bienes adquiridos después de que se haya dictado la orden), que no sean los bienes especificados;
- d) Bienes especificados de una persona que no sea el acusado.

3) Cuando:

a) El delito de blanqueo de capitales de que se haya hallado culpable o se haya incriminado al acusado o la actividad de blanqueo de capitales en que se sospecha que participó el acusado se ajuste a la definición del apartado i) de la definición de delito de blanqueo de capitales, los bienes respecto de los cuales puede formularse una solicitud de orden de congelación de conformidad con el párrafo 2) podrán estar ubicados en Antigua y Barbuda o en cualquier otro lugar del mundo;

b) El delito de blanqueo de capitales de que se haya hallado culpable o se haya incriminado al acusado o la actividad de blanqueo de capitales en que se sospecha que participó el acusado se ajuste a la definición del apartado ii) de la definición de delito de blanqueo de capitales, los bienes respecto de los

cuales puede formularse una solicitud de orden de congelación de conformidad con el párrafo 2) podrán estar ubicados únicamente en Antigua y Barbuda.

4) Cuando la Autoridad de Supervisión solicite al Tribunal Supremo que dicte una orden de conformidad con el presente artículo, el Tribunal Supremo, por orden y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19A, podrá:

a) Disponer que ninguna persona podrá enajenar ni someter a otras operaciones los bienes o la parte de los bienes que se especifique en la orden, excepto en la manera y en las circunstancias (de haberlas) que se especifiquen en la orden; y

b) Si el Tribunal Supremo considera que las circunstancias lo exigen, disponer que un fideicomisario asuma la custodia y el control de los bienes o de la parte de los bienes que se especifique en la orden.

5) El Tribunal Supremo, sin perjuicio del alcance general de sus atribuciones en virtud del presente artículo para imponer las condiciones que considere oportunas en relación con una orden de congelación, podrá disponer que se utilicen los bienes o una parte especificada de los bienes para sufragar todos o cualquiera de los gastos siguientes:

a) Los gastos de sustento del acusado por una suma razonable (incluidos los gastos de sustento de los dependientes del acusado (de haberlos) por una suma razonable y los gastos profesionales por una suma razonable);

b) Los gastos del acusado por una suma razonable para defenderse en un proceso incoado en virtud de la presente Ley o de cualquier cargo penal que guarde relación con ese proceso.

6) Las órdenes por las que se disponga el pago en concepto de gastos del acusado o de sus dependientes de conformidad con el párrafo 5) estarán sujetas a las limitaciones siguientes:

a) No se dispondrá ningún pago en concepto de gastos excepto en la medida (si procede) en que el Tribunal Supremo tenga la convicción de que el acusado no puede sufragar los gastos en cuestión recurriendo a los bienes del acusado que no hayan sido congelados;

b) No se dispondrá ningún pago en concepto de cualquier bien particular de los bienes congelados si existen sospechas fundadas de que el bien fue adquirido de forma ilícita;

c) No se dispondrá ningún pago a no ser que se haya presentado ante el Tribunal Supremo una declaración de conformidad con el artículo 19 B 1) d);

d) No se dispondrá ningún pago a no ser que el Tribunal Supremo tenga la convicción de que el acusado ha tomado todas las medidas razonables para someter todos sus bienes a la jurisdicción del Tribunal;

e) En toda disposición sobre el pago de gastos deberán especificarse los bienes con los que podrán sufragarse los gastos en cuestión.

7) A los efectos del presente artículo, los bienes no congelados del acusado serán cualesquiera bienes del acusado:

a) Que no estén sujetos a una orden de congelación en virtud de la presente Ley; o

b) Que a juicio del Tribunal Supremo no entren en la jurisdicción del Tribunal (tanto si están sujetos a una orden de congelación en virtud de la presente Ley como si no lo están).

8) Cuando un fideicomisario reciba instrucciones de conformidad con el párrafo 4 b) en relación con bienes podrá hacer todo lo que sea razonablemente necesario a fin de preservar los bienes, incluido lo siguiente, sin perjuicio del carácter general de la enumeración:

a) Comparecer como parte en un proceso civil que afecte a los bienes;

b) Velar por que los bienes estén asegurados;

c) Si los bienes consisten, en su totalidad o en parte, en valores o inversiones, realizar esos valores o inversiones o someterlos a otras operaciones; y

d) Si los bienes, en su totalidad o en parte, consisten en una empresa:

i) Contratar o despedir a empleados de la empresa; y

ii) Hacer lo que resulte necesario o conveniente para llevar adelante la empresa con una base comercial sólida;

e) Si los bienes, en su totalidad o en parte, consisten en acciones, el fideicomisario puede ejercer los derechos asociados a las acciones como si fuera el titular registrado de las acciones, con exclusión de cualesquiera derechos ostentados por el titular registrado.

9) La Autoridad de Supervisión puede dar instrucciones por escrito a una institución financiera para que congele bienes por un plazo de hasta siete días mientras cursa una solicitud de orden de congelación de conformidad con el párrafo 1).

19A 1) Cuando se curse una solicitud de conformidad con el párrafo 19 1) a), el Tribunal Supremo emitirá una orden de congelación.

1A) Cuando se curse una solicitud de conformidad con el párrafo 19 1) b), el Tribunal Supremo no emitirá una orden de congelación a no ser que:

a) La solicitud de la orden esté respaldada por una declaración jurada de un funcionario autorizado en que manifieste que sospecha que el acusado cometió el delito; y

b) El Tribunal, teniendo en consideración los asuntos que figuran en la declaración jurada, esté convencido de que existen motivos fundados para mantener esa sospecha.

1B) Cuando se curse una solicitud de conformidad con el párrafo 19 1) c), el Tribunal Supremo no emitirá una orden de congelación a no ser que:

a) La solicitud de la orden este respaldada por una declaración jurada de un funcionario autorizado en que manifieste que sospecha que el acusado participó en actividades de blanqueo de capitales; y

b) El Tribunal, teniendo en consideración los asuntos que figuran en la declaración jurada, esté convencido de que existen motivos fundados para mantener esa sospecha.

2) Cuando se emita una orden de congelación con fundamento en que:

a) Se ha imputado o se va a imputar al acusado un delito de blanqueo de capitales; o

b) Se sospecha que el acusado ha estado implicado en actividades de blanqueo de capitales,

la orden de congelación dejará de tener efecto 30 días después de su emisión, a no ser que al cumplirse ese plazo se haya imputado al acusado un delito de blanqueo de capitales, o se haya cursado cualquier solicitud de orden de incautación o de fiscalización de bienes civiles.

3) Cuando la solicitud se refiera a una orden de congelación en relación con los bienes especificados o con una persona que no sea el acusado, el Tribunal no emitirá una orden de congelación en relación con los bienes a no ser que:

a) La solicitud de la orden este respaldada por una declaración jurada de un funcionario autorizado en que manifieste que:

i) El funcionario sospecha que los bienes han servido de instrumento de un delito;

ii) El funcionario sospecha que el acusado tiene un interés en los bienes; y

b) El Tribunal, teniendo en consideración los asuntos que figuran en la declaración jurada, esté convencido de que existen motivos fundados para mantener esa sospecha.

4) El Tribunal Supremo puede emitir una orden de congelación respecto de unos bienes tanto si existe como si no el riesgo de que los bienes sean enajenados o sometidos a otra operación de un modo que vaya en contra de lo dispuesto en la presente Ley.

5) La Autoridad de Supervisión, de conformidad con el procedimiento prescrito en el artículo 28 D, notificará al acusado y a cualquier otra persona que la Autoridad de Supervisión tenga motivos para creer que puede tener un interés en los bienes, con un mínimo de 14 días de antelación, una orden emitida en virtud del párrafo 4).

Procedimiento para congelar fondos

Cuando una persona sea condenada por un delito de blanqueo de capitales o esté acusada o vaya a ser acusada de un delito de blanqueo de capitales, o se sospeche de ella que ha estado implicada en actividades de blanqueo de capitales, la Autoridad de Supervisión (Oficina de Control Nacional de Drogas y de Política contra el Blanqueo de Capitales) cursará una solicitud a un magistrado del Tribunal Supremo. La solicitud se hará a petición de parte. Si el acusado es condenado por un delito de blanqueo de capitales, el Tribunal deberá emitir la orden de congelación. Si, en cambio, la persona no es condenada por un delito de blanqueo de capitales, el Tribunal sólo emitirá una orden de congelación en caso de que Autoridad de

Supervisión demuestre al Tribunal que se cumplen las condiciones del artículo 19 A (resumidas más arriba).

El artículo 19 9) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales dispone que la Autoridad de Supervisión dé instrucciones a una institución financiera para que congele los bienes de toda persona que haya sido condenada por un delito de blanqueo de capitales, o haya sido o vaya a ser acusada de un delito de blanqueo de capitales, o de quien se sospeche que ha participado en actividades de blanqueo de capitales. Las órdenes de congelación emitidas en virtud del presente artículo serán válidas por un plazo de siete días. Si la Autoridad de Supervisión desea que continúe vigente la orden de congelación, deberá cursarse una solicitud al Tribunal Supremo de conformidad con el párrafo 1).

Ley sobre el producto del delito de 1993

Las disposiciones relativas a la congelación de fondos en virtud de la Ley sobre el producto del delito de 1993 figuran en los artículos 31 a 38 de la Ley. El texto de los artículos es el siguiente:

31. 1) Cuando una persona (denominada “el acusado” en el presente artículo y en el artículo 32):

- a) haya sido condenada por un delito tipificado en el anexo; o
- b) haya sido acusada de un delito tipificado en el anexo,

el Director de la Fiscalía Pública puede solicitar al Tribunal que dicte una orden judicial que limite la disposición de cualesquiera bienes realizables que posea el acusado o bienes realizables especificados que posea una persona distinta del acusado.

2) Podrá cursarse una solicitud de orden judicial a petición de parte, que deberá presentarse por escrito y acompañada de una declaración en que se indique:

- a) Si el acusado ha sido condenado por un delito tipificado en el anexo, el delito tipificado en el anexo por el que fue condenado el acusado, la fecha de la condena, el tribunal que dictó la condena, y si se ha interpuesto recurso o no en relación con la condena;
- b) Si el acusado no ha sido condenado por un delito tipificado en el anexo, el delito tipificado en el anexo de que se le acusa y los motivos por los que se cree que el acusado cometió el delito;
- c) Una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la orden judicial;
- d) El nombre y la dirección de la persona que se cree que está en posesión de los bienes;
- e) Los motivos para creer que la legitimidad de los bienes está comprometida en razón del delito;
- f) Los motivos para creer que el acusado obtuvo un beneficio, directa o indirectamente, de la comisión del delito;
- g) Si la solicitud se refiere a una orden judicial respecto de los bienes de una persona distinta del acusado, los motivos para creer que la legitimidad

de los bienes está comprometida en razón del delito y que los bienes están sometidos al control efectivo del acusado;

h) Los motivos para creer que puede emitirse o que es probable que se emita una orden de incautación o de decomiso respecto de los bienes en virtud de la presente Ley.

32. 1) Con arreglo al presente artículo, cuando el Director de la Fiscalía Pública solicite al Tribunal que dicte una orden judicial respecto de unos bienes y el Tribunal tenga la convicción de que:

a) El acusado ha sido condenado por un delito tipificado en el anexo, o ha sido acusado de un delito tipificado en el anexo;

b) Existen motivos fundados para creer que el acusado cometió el delito, en caso de que el acusado no haya sido condenado por un delito tipificado en el anexo;

c) Existen motivos fundados para creer que la legitimidad de los bienes está comprometida en razón de un delito, o que el acusado obtuvo un beneficio, directa o indirectamente, de la comisión del delito;

d) Existen motivos fundados para creer que la legitimidad de los bienes está comprometida en razón de un delito y que los bienes están sometidos al control efectivo del acusado, en caso de que la solicitud se refiera a una orden judicial respecto de los bienes de una persona distinta del acusado; y

e) Existen motivos fundados para creer que puede emitirse o que es probable que se emita una orden de incautación o de decomiso respecto de los bienes en virtud de la presente Ley,

El Tribunal emitirá una orden:

f) Por la que se prohíba al acusado o a cualquier persona enajenar o someter a otras operaciones los bienes o la parte de los bienes o los intereses en los bienes que se especifiquen en la orden, excepto en el modo que se especifique eventualmente en la orden; y

g) A petición del Director de la Fiscalía Pública, si el Tribunal está convencido de que las circunstancias exigen:

i) Dar instrucciones al fideicomisario público o a otra persona que pueda designar el Tribunal para que asuman la custodia de los bienes o de la parte de los bienes que se especifique en la orden y gestionar los bienes en su totalidad o en parte, o disponer de ellos de otro modo, de conformidad con las instrucciones del Tribunal; y

ii) Exigir a cualquier persona que esté en posesión de los bienes que dé posesión de los mismos al fideicomisario público o a la persona designada en virtud del apartado i) para que asuma la custodia y el control de los bienes.

2) Hasta que se haya nombrado a un fideicomisario público, el Secretario, el Secretario Adjunto o el Subsecretario del Tribunal Supremo ejercerá las funciones de fideicomisario público en virtud de la presente Ley.

3) Podrá emitirse una orden en virtud del párrafo 1) con sujeción a las condiciones que decida el Tribunal y, sin perjuicio de la validez general de ello, el Tribunal podrá disponer el pago, utilizando los bienes o una parte especificada de los bienes, de la totalidad o de cualquiera de los gastos siguientes:

a) Los gastos de sustento del acusado por una suma razonable (incluidos los gastos de sustento de los dependientes del acusado (de haberlos) por una suma razonable y los gastos profesionales por una suma razonable);

b) Los gastos del acusado por una suma razonable para defenderse de los cargos penales y de las actuaciones judiciales que se basen en la presente Ley.

4) Para determinar si existen motivos fundados para creer que los bienes están sujetos al control efectivo del acusado, el Tribunal puede tener en consideración los asuntos a que se hace referencia en el artículo 23 2).

5) Cuando el fideicomisario público u otra persona equivalente nombrada en virtud del apartado 1) g) i) reciba instrucciones en relación con cualesquiera bienes, el fideicomisario público o esa otra persona pueden solicitar al Tribunal, mediante citación, instrucciones o respuestas a cualquier pregunta en relación con la gestión o la preservación de los bienes que obran en su control.

6) Se notificará la solicitud presentada en virtud del párrafo 4) a todas las personas interesadas en la solicitud o a las personas que el Tribunal considere procedente, y todas esas personas tendrán la facultad de comparecer en la audiencia y ser oídas.

7) Se considerará que el fideicomisario público u otra persona equivalente nombrada en virtud del apartado 1) g) i) que actúen siguiendo instrucciones del Tribunal han cumplido sus obligaciones en el asunto de la solicitud.

33. 1) Antes emitir una orden en virtud del artículo 32, el Tribunal podrá pedir a la Corona que dé las garantías que el Tribunal considere procedentes respecto del pago en concepto de daños o de costos, o en concepto de ambos, en relación con la emisión y ejecución de la orden.

2) A los efectos del presente artículo, el Director de la Fiscalía Pública, tras consultar con el Fiscal General, podrá dar al Tribunal las garantías respecto del pago en concepto de daños o de costos, o en concepto de ambos, que haya solicitado el Tribunal.

34. Antes de emitir una orden judicial, el Tribunal podrá exigir que ello se notifique a cualquier persona que, a juicio del Tribunal, pueda tener intereses en los bienes, y podrá oír a esa persona, a no ser que el Tribunal sea de la opinión de que efectuar esa notificación antes de emitir la orden podría ocasionar la desaparición o la pérdida de los bienes o una disminución de su valor.

35. La orden judicial se notificará a toda persona afectada por ella del modo que decida el Tribunal o que pueda estar prescrito por las normas del Tribunal.

36. 1) Deberá registrarse ante el Secretario del Tribunal Supremo, de conformidad con la Ley de ejecución recíproca de sentencias, y ante el Jefe del Registro de la Propiedad una copia de toda orden judicial restrictiva que afecte a tierras, inmuebles o derechos reales hereditarios en Antigua y Barbuda.

2) Ninguna orden judicial restrictiva tendrá efecto de no estar registrada según se establece en la Ley del registro de la propiedad.

3) Si los detalles de una orden judicial restrictiva se han hecho constar o se han registrado, según sea el caso, de conformidad con la Ley de ejecución recíproca de sentencias o la Ley del registro de la propiedad, se considerará que, a los efectos del artículo 37, toda persona que posteriormente disponga de los bienes tenía noticia de la orden en el momento de disponer de los bienes.

37. 1) Toda persona que contravenga dolosamente una orden judicial restrictiva enajenando bienes que estén sujetos a la orden judicial o disponiendo de ellos de otro modo incurrirá en un delito grave, que en caso de condena será sancionado con:

a) Una multa de 100.000 dólares o una pena de cinco años de prisión, o ambas cosas, si se trata de una persona física; o

b) Una multa de 500.000 dólares, si se trata de una persona jurídica.

2) Cuando se emita una orden judicial restrictiva respecto de unos bienes y los bienes sean enajenados o se disponga de ellos de otro modo, contraviniendo la orden judicial, y el enajenamiento o la disposición no haya tenido contraprestación suficiente o no se haya hecho de buena fe y no se haya notificado, el Director de la Fiscalía Pública puede solicitar al Tribunal que emitió la orden judicial que dicte orden de que se anule el enajenamiento o la disposición.

3) Cuando el Director de la Fiscalía Pública formule una solicitud en virtud del párrafo 2) en relación con un enajenamiento o una disposición, el Tribunal podrá:

a) Anular el enajenamiento o la disposición con efectos a partir de la fecha en que tuvo lugar el enajenamiento o la disposición; o

b) Anular el enajenamiento o la disposición con efectos a partir de la fecha de la orden judicial emitida en virtud del presente párrafo y declarar los respectivos derechos de cualesquiera personas que adquirieron intereses en los bienes en la fecha o a partir de la fecha en que tuvo lugar el enajenamiento o la disposición, y antes de la fecha de la orden emitida en virtud del presente párrafo.

38. La orden judicial restrictiva seguirá en vigor hasta que:

a) Sea revocada o modificada en virtud del artículo 39;

b) Deje de estar en vigor en virtud del artículo 40; o

c) Se dicte una orden de incautación o decomiso, según proceda, respecto de los bienes que sean motivo de la orden; o

d) Los bienes que sean motivo de la orden sean incautados por la Corona en virtud de cualquier otra ley.

Procedimiento

Cuando una persona haya sido condenada o acusada por un delito tipificado en el anexo de la Ley, el Director de la Fiscalía Pública podrá solicitar a un magistrado del Tribunal Supremo que dicte una orden judicial restrictiva respecto de los bienes

poseídos por esa persona o respecto de los bienes poseídos por una tercera persona que constituyan un obsequio ofrecido a la tercera persona por la persona relacionada con el delito o acusada. La solicitud podrá hacerse a petición de parte. En el anexo 3 figura una lista de los delitos tipificados en el anexo de la Ley.

Congelación de fondos a petición de otro país

La Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996

En virtud del artículo 23 podrá dictarse una orden de congelación de fondos a petición de otro país con el que exista un tratado en materia de asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

La Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales de 1993

En virtud del artículo 28 de la Ley podrá dictarse una orden de congelación de fondos a petición de un país del Commonwealth o de un país con el que exista un tratado en materia de asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

Apartado d) del artículo 1:

En virtud del artículo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2001, toda persona que descubra que está en posesión o tiene el control de cualesquiera fondos u otros activos en que tengan intereses un terrorista o una organización terrorista, está obligado a conservar y mantener el control sobre ellos y a informar de su existencia a la Autoridad de Supervisión. Ello implica que, de descubrirse que fondos y recursos económicos recaudados para fines religiosos, de beneficencia o culturales se desvían para su utilización para objetivos terroristas, ello deberá notificarse a la Autoridad de Supervisión.

El artículo 7 de la Ley de prevención del terrorismo de 2001 es aplicable a los bancos y las instituciones financieras, y el artículo 8 es aplicable a los particulares de forma análoga al artículo 7. En virtud del artículo 8, todas las personas, incluidos los particulares, están obligadas a mantenerse al corriente de los nombres de terroristas y organizaciones terroristas publicados en el diario oficial por la Autoridad de Supervisión de conformidad con el artículo 3. Se considerará que toda persona que realice operaciones comerciales con cualquiera de las personas u organizaciones especificadas en la declaración publicada en el diario oficial tiene conocimiento de que está efectuando transacciones con un terrorista o con una organización terrorista y de que, en ese momento, está en posesión y tiene el control de activos pertenecientes a un terrorista o a una organización terrorista.

En virtud del artículo 9 de la Ley, la Autoridad de Supervisión tiene amplias facultades para investigar, examinar y prohibir cualquier transacción en divisas, monedas o valores extranjeros o cualquier transferencia, crédito o pago por cualquier institución bancaria, a través de ella o con destino a ella, en la medida en que esas transferencias o esos pagos tengan que ver con algún interés en un país extranjero o de un nacional de un país extranjero. Esta disposición es suficientemente amplia para que la Autoridad de Supervisión pueda impedir que los recursos económicos recaudados en Antigua y Barbuda se desvíen para otros fines, en particular la financiación del terrorismo y de las organizaciones terroristas.

El artículo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2001 es aplicable a las personas, incluidos los particulares, los abogados y otros intermediarios, que

adquieran conocimiento de que son depositarios o están en posesión de fondos que pertenecen a terroristas o a organizaciones terroristas. En la Ley de prevención del terrorismo de 2001, el término “personas” se define como referente a particulares y entidades.

En la Ley de sociedades fraternales (184), las sociedades fraternales se definen como sociedades cuyo fin es proporcionar auxilio a sus miembros por medio de suscripciones voluntarias de los mismos, con o sin ayuda de donaciones. La malversación de fondos se trata en el artículo 82 2), en que se estipula lo siguiente:

“Toda persona que, por engaño o fraude, obtenga posesión de cualesquiera bienes de una sociedad o una sucursal de una sociedad, o retenga o haga uso indebido de cualquiera de esos bienes en su posesión, o utilice dolosamente una parte de esos bienes para fines distintos de los expresados o prescritos en el estatuto de la sociedad o la sucursal y autorizados por la presente Ley, estará sujeta, por los conceptos que se mencionan en el presente artículo, al pago de una multa de hasta 1.000 dólares y de los costos y de todas las sumas de dinero utilizadas indebidamente y, en defecto de esa entrega o pago, o del pago de esa multa y los costos mencionados, a una pena de prisión, con o sin trabajos forzados, por un plazo de hasta tres meses.”

Denuncia de actividades sospechosas

En virtud del artículo 13 1) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996, todas las instituciones financieras están obligadas a prestar especial atención a todas las transacciones comerciales complejas, inhabituales o de gran volumen, tanto si se han llevado a término como si no, y a todos los historiales inhabituales de transacciones y a las transacciones insignificantes pero periódicas que no tengan un fin económico o jurídico aparente, y a las relaciones y transacciones con personas, incluidas empresas y otras instituciones financieras, de países que no hayan adoptado un programa integral de lucha contra el blanqueo de capitales.

En virtud del artículo 13 2) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996, las instituciones financieras están obligadas a notificar sin demora todas las transacciones que puedan constituir blanqueo de capitales o estar relacionadas con esa actividad.

En virtud de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996, los intermediarios tales como abogados, notarios y contadores sólo están obligados a notificar las transacciones o actividades sospechosas cuando actúen en calidad de instituciones financieras de conformidad con la lista del primer anexo de la Ley (véase el anexo 2). Un ejemplo de ello sería cuando actuaran obedeciendo instrucciones para ocuparse de asuntos inmobiliarios o negociar con fondos en nombre de un cliente.

Además, en virtud de la regla 8 del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales de 1999, toda institución financiera que entre en contacto con un intermediario que actúe en su calidad profesional de abogado, notario, contador autorizado, contador público certificado, auditor o persona nombrada por una empresa para realizar transacciones comerciales en nombre de otra persona está obligada a establecer la verdadera identidad del solicitante o de la persona en cuyo nombre actúa el intermediario, y a obtener pruebas suficientes para cerciorarse de la naturaleza de la transacción y del origen de los fondos.

Penas

En virtud del artículo 13 6) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales, la pena por faltar a la obligación de notificar una transacción sospechosa es una multa de 50.000 dólares del Caribe Oriental o seis meses de prisión, o ambas penas. Además, la Autoridad de Regulación podrá suspender o revocar la licencia de la institución financiera.

Apartado a) del artículo 2:

No existen leyes específicas para prevenir el reclutamiento para grupos terroristas dentro o fuera del territorio de Antigua y Barbuda. Los métodos que se aplican en la práctica para prevenir el reclutamiento son la prohibición de la entrada en el país o la denegación de la condición de residente a las personas sospechosas de terrorismo: el Departamento de Inmigración ha recibido una copia de las listas de terroristas de las Naciones Unidas y de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, de modo que pueden realizarse inspecciones minuciosas en todas las entradas fronterizas y puede seguirse de cerca a los sospechosos. El Departamento de Inmigración se mantiene alerta y puede notificar la llegada de cualquier miembro de grupos sospechosos que sea motivo de inquietud en lo que respecta al terrorismo.

La tenencia de armas de fuego y de explosivos sin licencia es ilegal en Antigua y Barbuda. En el caso de las armas de fuego, es necesario que el comisario de policía expida una licencia. Todas las armas automáticas están prohibidas para el público en general. Las armas de fuego están reguladas por la Ley de armas de fuego (171). Los explosivos están regulados por la Ley de explosivos (159). La exportación de armas está prohibida por proclamación del Gabinete en virtud de la Ley de exportación de armas y material bélico (160). La importación y exportación ilícitas de armas también se tratan en la Ley de Aduanas y Aranceles de 1952, en su versión modificada. La aplicación de esas Leyes es competencia de los oficiales de aduanas, los responsables de seguridad de los aeropuertos, los miembros de las fuerzas de defensa de Antigua y Barbuda y el Departamento de Inmigración. La evaluación de los riesgos generales está a cargo del Consejo de Seguridad de Antigua y Barbuda, el Comité de Tráfico Ilícito y el Equipo de Tareas Intergubernamental. Antigua y Barbuda ha ratificado recientemente la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

Apartados d) y e) del artículo 2:

En la Ley de prevención del terrorismo de 2001 no se preveían disposiciones sobre las cuestiones planteadas en relación con esos apartados. La nueva Ley contendrá disposiciones para abordar esas cuestiones. Se adoptarán las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 del modelo de ley del Commonwealth.

Incitación, promoción o recaudación de bienes para la comisión de actos de terrorismo

14. Todo aquel que, dolosamente:

- a) Incite a cometer un acto de terrorismo o promueva su comisión,

b) Incite a pertenecer a un grupo terrorista o promueva la pertenencia a un grupo terrorista; o

c) Recaude bienes en beneficio de un grupo terrorista o para cometer un acto de terrorismo

incurre en delito y, de ser hallado culpable, le será aplicable una pena de hasta 10 años de prisión.

15. Todo aquel que sea:

a) Propietario, ocupante, arrendatario o encargado de un edificio, local, sala u otro lugar y que permita dolosamente que en ese edificio, local, sala o lugar se celebre una reunión;

b) Propietario, fletador, arrendatario, operador, agente o patrón de un buque o propietario, fletador, arrendatario, operador, agente o piloto a cargo de una aeronave y que permita dolosamente que se utilice ese buque o esa aeronave,

a los fines de cometer un delito tipificado en el artículo 14, o planear, promover o apoyar la comisión de un acto de terrorismo, incurre en delito y, de ser hallado culpable, le será aplicable una pena de hasta 10 años de prisión.

Conspiración para cometer delitos tipificados en la presente Ley

16. 1) Toda persona que conspire con otra persona en Antigua y Barbuda para realizar en cualquier lugar situado fuera de Antigua y Barbuda cualquier acto que, de haberse realizado en Antigua y Barbuda, habría constituido delito en virtud de la presente Ley se considerará que ha conspirado para realizar ese acto en Antigua y Barbuda.

2) Toda persona que conspire con otra persona en un lugar situado fuera de Antigua y Barbuda para realizar en Antigua y Barbuda cualquier acto que constituya delito en virtud de la presente Ley se considerará que ha conspirado en Antigua y Barbuda para realizar ese acto.

La ley de prevención del terrorismo de 2001 no modifica la Ley de represión del terrorismo de 1993. En la Ley de represión del terrorismo están tipificados delitos asociados con actos de terrorismo, tales como asesinato, lesiones y destrucción de bienes. Esos delitos, que no se consideran de carácter político, están sujetos a extradición. La Ley también estipula que los delitos de ese tipo son extraterritoriales.

Apartado f) del artículo 2:

Los plazos para prestar asistencia judicial en investigaciones penales dependen de la urgencia del asunto. La restricción de los fondos en una institución financiera puede surtir efecto inmediatamente a raíz de una petición de asistencia judicial recíproca hecha por la Autoridad de Supervisión en virtud del artículo 19 9) de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996 y mantenerse vigente durante siete días mientras se cursa una solicitud oficial de orden judicial al Tribunal. Los asuntos relativos a investigaciones penales presentados a las autoridades competentes o a la Autoridad de Supervisión o a la Oficina de Control Nacional de Drogas y de Política contra el Blanqueo de Capitales por la autoridad que corresponda pueden ser atendidos en un plazo de días, si no de horas.

Apartado c) del artículo 3:

Antigua y Barbuda ha firmado tratados de asistencia judicial recíproca en asuntos penales con los Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Canadá. Antigua y Barbuda ha puesto en vigor la Ley de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, que estipula que se prestará asistencia judicial a todos los países del Commonwealth y a cualquier país con el que Antigua y Barbuda mantenga un tratado. Antigua y Barbuda ha ratificado el Convenio sobre Asistencia Judicial Recíproca de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de modo que se podrá prestar ese tipo de asistencia a todos los países de la OEA.

Apartado d) del artículo 3:

Antigua y Barbuda todavía no es parte de los convenios siguientes:

- a) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988;
- b) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988;
- c) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988;
- d) Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, hecho en Montreal el 1º de marzo de 1991;
- e) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

Próximamente se presentarán resoluciones al Parlamento de Antigua y Barbuda para pedir su aprobación a la ratificación de los mencionados convenios. Las resoluciones se presentarán antes del 30 de junio de 2003.

En 1975 se aprobó la Ley de secuestros aéreos (200) para dar efecto a las disposiciones del Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. La Ley de prevención del terrorismo de 2001 contiene disposiciones para dar efecto al Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

El Departamento Jurídico examina actualmente las disposiciones de los convenios para determinar las medidas legislativas que deberían adoptarse para lograr el pleno efecto de esas disposiciones.

La Oficina de Control Nacional de Drogas y de Política contra el Blanqueo de Capitales se ocupa de los asuntos relativos al tráfico ilícito de estupefacientes, el blanqueo de capitales, el delito organizado y el terrorismo.

Apartado f) del artículo 3:

Actualmente puede prevenirse la concesión de asilo a las personas sospechosas de terrorismo en virtud del artículo 3 de la Ley de expulsión de personas indeseables (450). En virtud del artículo 3, el Gabinete de Antigua y Barbuda está facultado para dictar una orden de expulsión por la que se exija a cualquier persona no nativa de Antigua y Barbuda que abandone el país, siempre que resulte necesario dictar tal orden de expulsión para mantener la paz y el orden público en el territorio nacional. Además, en virtud del artículo 6 de la Ley de inmigración (208), el Gobernador General está facultado para prohibir por orden la entrada en Antigua y Barbuda a cualquier extranjero o clase de extranjeros.

Apartado g) del artículo 3:

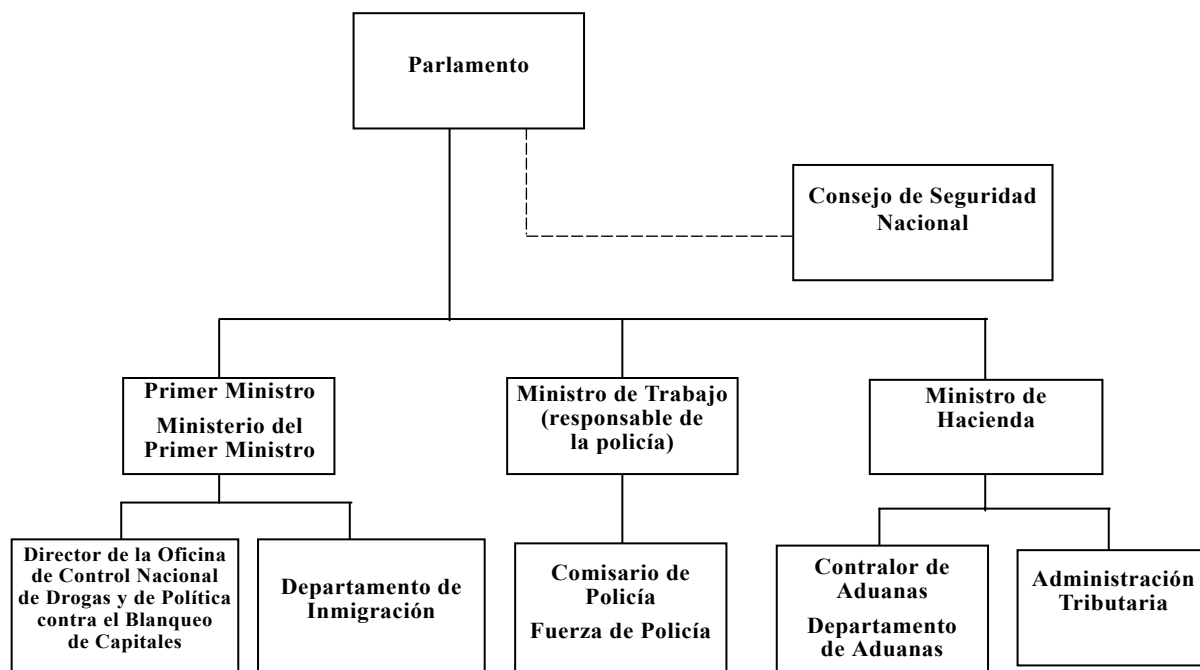
Las alegaciones de motivación política no son reconocidas como razón para denegar la extradición en virtud de la Ley de extradición (No. 12 de 1993). La Ley de represión del terrorismo de 1993 estipula que ninguno de los delitos a los que se aplica la Ley (véase el anexo 1) se considerará delito de carácter político, y asimismo ninguna de las actuaciones judiciales respecto de delitos a los que se aplique la Ley se considerará parte de una causa penal de carácter político o de un proceso penal de carácter político.

Otros asuntos

Organigrama (véase más abajo). Los distintos ministerios y departamentos mantienen enlaces e intercambian información unos con otros de forma permanente. Al fin de hacer oficiales esos acuerdos de cooperación interna, se está redactando un memorando de entendimiento conjunto.

Antigua y Barbuda

Mecanismo Administrativo para la Prevención del Terrorismo



Anexo 1

Lista de delitos tipificados en el anexo de la Ley de represión del terrorismo de 1993

1. Asesinato;
2. Homicidio sin premeditación;
3. Violación;
4. Secuestro, rapto;
5. Falso encarcelamiento;
6. Agresión con resultado de lesiones corporales o heridas;
7. Incendio voluntario;
8. Delitos previstos en cualquiera de las siguientes disposiciones de la Ley de delitos contra la persona (58)
 - a) Artículo 17 (heridas con intención de causar lesiones corporales de gravedad);
 - b) Artículo 19 (lesiones corporales muy graves);
 - c) Artículo 20 (intento de estrangulación, etc. a fin de cometer un delito penado o participar en su comisión);
 - d) Artículo 21 (utilización de cloroformo, etc. a fin de cometer un delito penado o participar en su comisión);
 - e) Artículo 22 (administración de veneno, etc. maliciosamente para poner en peligro la vida o infligir lesiones corporales graves);
 - f) Artículo 23 (administración de veneno, etc. maliciosamente con intención de causar heridas, etc.);
9. Cualquier delito tipificado en las disposiciones siguientes de la Ley de delitos contra la persona (58):
 - a) Artículo 48 (secuestro de una mujer);
 - b) Artículo 51 (robo de niños);
10. Utilización de explosivos para cometer delitos graves tipificados en la Ley de delitos contra la persona (capítulo 58)
 - a) Artículo 27 (lesiones corporales con pólvora);
 - b) Artículo 28 (utilización de pólvora para causar una explosión o envío a cualquier persona de sustancias explosivas con intención de causar lesiones corporales graves);
 - c) Artículo 29 (colocación de pólvora cerca de un edificio con intención de infligir lesiones corporales a una persona);

11. Los delitos siguientes tipificados en la Ley de armas de fuego de 1972 (No. 11, de 1972)
 - a) Un delito tipificado en el artículo 12 (tenencia de armas de fuego o municiones con intención de causar lesiones);
 - b) Un delito tipificado en el artículo 13 (utilización de armas de fuego o municiones para oponer resistencia a una detención);
12. Un delito tipificado en los artículos 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de la Ley de daños intencionados (51);
13. Un delito tipificado en la Ley de secuestros aéreos de 1975 (No. 21, de 1975);
14. Un delito de intento de cometer cualquiera de los delitos mencionados en los párrafos anteriores de la presente lista.

Anexo 2

Lista de actividades de las instituciones financieras (primer anexo de la Ley de prevención del blanqueo de capitales de 1996)

1. “Operaciones bancarias” y “operaciones financieras”, tal como se definen en la Ley de entidades bancarias y en la Ley de instituciones financieras no bancarias;
2. “Operaciones bancarias extraterritoriales internacionales”, tal como se definen en la Ley de empresas comerciales internacionales;
3. Capital de riesgo;
4. Servicios de transmisión de capitales;
5. Emisión y administración de medios de pago (por ejemplo, tarjetas de crédito, cheques de viaje y cheques bancarios);
6. Garantías y obligaciones;
7. Transacciones comerciales en nombre propio o en nombre de los clientes referidas a:
 - a) Instrumentos del mercado monetario (por ejemplo, cheques, detrás de cambio, certificados de depósito, efectos negociables, etc.);
 - b) Divisas;
 - c) Instrumentos financieros o derivados de los productos básicos (por ejemplo, futuras opciones e instrumentos basados en los tipos de interés y el mercado de divisas, etc.);
 - d) Instrumentos transferibles o negociables;
8. Corretaje de capitales;
9. Préstamos en efectivo y pignoración;
10. Cambios en moneda (por ejemplo, casa de cambio);
11. Negocios inmobiliarios;
12. Sociedades crediticias;
13. Empresas de construcción;
14. Compañías fiduciarias;
15. Casinos;
16. Apuestas por la Internet;
17. Apuestas deportivas.

Anexo 3

Lista de delitos tipificados en la Ley del producto del delito de 1993

1. Tenencia de estupefacientes controlados con fines de oferta, en contra del artículo 5 3) de la Ley del abuso de estupefacientes de 1973 (No. 21 de 1973);
 2. Tráfico de estupefacientes controlados, en contra del artículo 19A de la Ley del abuso de estupefacientes de 1973 (No. 21 de 1973);
 3. Ayuda a otras personas para retener el producto del tráfico de estupefacientes, en contra del artículo 19B de la Ley del abuso de estupefacientes de 1973 (No. 21 de 1973);
 4. Participación en fraudes organizados, en contra del artículo 63, o comisión de un delito de fraude público, en contra de los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley de robos (capítulo 44);
 5. Blanqueo de capitales (en relación con los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la presente lista), en contra del artículo 61 de la presente Ley;
 6. Tenencia de bienes procedentes de actividades ilícitas (en relación con los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la presente lista), en contra del artículo 62 de la presente Ley.
-